

RESPUESTA DEL GOBIERNO

(184) PREGUNTA ESCRITA CONGRESO

184/2781 a 184/2793

09/01/2020

4855 a 4867

AUTOR/A: DE MEER MÉNDEZ, Rocío (GVOX); FERNÁNDEZ-ROCA SUÁREZ, Carlos Hugo (GVOX)

RESPUESTA:

El 28 de junio de 2019 la Unión Europea alcanzó un Acuerdo político con Mercosur, cuyo texto deberá ser aprobado por el Consejo de la Unión Europea, después por el Parlamento Europeo y, finalmente, por los Estados miembros y por los cuatro países Mercosur.

La valoración del Gobierno de España del resultado de las negociaciones es positiva. Se trata de un acuerdo ambicioso, amplio y equilibrado, que además tiene una importancia estratégica para España desde el punto de vista político, económico y comercial.

El Acuerdo generará importantes oportunidades de negocio para las empresas españolas en todos los sectores productivos, permitirá reforzar el ya de por sí privilegiado posicionamiento que tienen los productos y servicios españoles en los países Mercosur y proporcionará mayor seguridad jurídica y una mejora del clima de negocio del que se beneficiarán las empresas e inversores españoles.

Además, el Gobierno de España ha apoyado la formalización del Acuerdo por los grandes beneficios globales del mismo, no solo económicos sino también en materia social y medioambiental.

España y la Unión Europea logran con este Acuerdo el acceso a un mercado de 260 millones de consumidores, con un Producto Interior Bruto anual de 2,2 billones de euros. Además la Unión Europea es la primera en alcanzar un acuerdo con este bloque económico de Mercosur, que acostumbra a imponer importantes barreras arancelarias y no arancelarias a sus socios comerciales.



Con este acuerdo, las empresas europeas se beneficiarán de un ahorro arancelario de 4.000 millones de euros (unos 400 millones de euros en el caso de las empresas españolas).

Cabe señalar que en el transcurso de las negociaciones se han tenido en cuenta los intereses de los sectores considerados sensibles a la hora de calibrar las concesiones a Mercosur. Las negociaciones, especialmente en lo que se refiere al capítulo agrícola, han contemplado los intereses de estos sectores a efectos de conseguir contingentes o periodos transitorios que permitan tanto una adecuada adaptación del sector a una mayor competencia como aprovechar las oportunidades que ofrece el nuevo mercado.

Por otra parte, no se debe olvidar que el Acuerdo recoge la posibilidad de establecer medidas de salvaguardia en caso de que se produzcan incrementos repentinos de las importaciones que provoquen perturbaciones en el mercado europeo con efectos perniciosos para los productores comunitarios. Este mecanismo se aplicaría a todos los productos, incluidos aquellos para los que hay contingentes arancelarios.

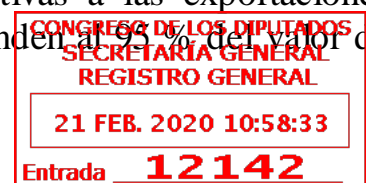
Así, el Acuerdo recoge una serie de instrumentos de defensa comercial acordes con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para situaciones urgentes o ante prácticas desleales.

Los instrumentos de defensa comercial de la OMC permanecen a disposición de las partes a fin de resolver problemas como el *dumping* y la concesión de subvenciones, o por un aumento repentino de las importaciones. Además de la confirmación de los derechos y las obligaciones de las partes, en virtud de los acuerdos de la OMC, se incluyen algunos elementos adicionales como el aumento de la transparencia y las consultas.

La cláusula de salvaguardia bilateral tiene una duración limitada (hasta dieciocho años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo) y permite la suspensión de las preferencias durante un período de hasta dos años, con una posible prórroga de otros dos años.

Además, el Acuerdo también recoge un mecanismo de resolución de controversias en última instancia en el que las consultas ceden el paso a un órgano arbitral que emitiría un laudo, que si no fuera cumplido permitiría el uso de contramedidas por la parte perjudicada. Paralelamente también se instituye un procedimiento de mediación.

Dentro del sector primario, y con carácter general, se eliminarán gradualmente los derechos sobre el 93 % de las líneas arancelarias relativas a las exportaciones agroalimentarias de la Unión Europea. Estas líneas corresponden al 95 % del valor de





las exportaciones de los productos agrícolas de la Unión Europea, lo que supone una oportunidad especialmente para algunos en los que España tiene intereses ofensivos, como:

Aceite de oliva (que actualmente tiene un arancel del 10%).

Vino (con aranceles de entre el 20 y el 35%).

Frutas, como los melocotones (entre 10% para fresco y 35% para conserva).

Bebidas espirituosas (hasta un 35% de arancel actualmente).

Con respecto a las importaciones, algunas estarán sujetas a compromisos de liberalización parcial, incluidos los contingentes arancelarios para los productos más sensibles, como es el caso de la miel, en la que se han acordado 45 000 toneladas libres de derechos. El volumen se introducirá progresivamente en seis etapas anuales iguales.

El Acuerdo incluye disposiciones para facilitar el comercio de vinos y bebidas espirituosas dentro de un anexo específico que liberaliza el mercado del vino en el Mercosur con un precio mínimo para el vino espumoso durante los primeros doce años y exclusión recíproca del vino a granel.

El anexo también abarca el reconocimiento de las prácticas enológicas, la certificación y el etiquetado. Esto será positivo para el sector vitivinícola almeriense, ya que se asegura que todas las partes adopten las definiciones y prácticas para la producción del vino recomendadas y publicadas por la Organización Internacional del Vino y la Viña, de la que España es parte. El Acuerdo incluye una cláusula según la cual, si una de las partes decidiera modificar una de esas definiciones o prácticas, deberá notificar a la otra parte e incluir un dossier técnico al respecto. Hay un periodo de 90 días para aceptar la modificación, y si no fuera el caso, un plazo de 60 para encontrar una solución. El Acuerdo también incluye la creación de puntos focales de contacto para coordinar a las autoridades encargadas de implementar el anexo.

Para la evaluación del impacto real del Acuerdo a nivel sectorial, teniendo en cuenta el efecto acumulado de los acuerdos ya suscritos y los que se prevé concluir en el medio plazo, en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (AGRIPESCA) del 15 de julio de 2019, España solicitó ayuda a la Comisión Europea.

Así, el entonces Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó que había encargado a sus servicios la actualización de los datos de 2016 en relación con el impacto acumulativo de Mercosur y otros 11 acuerdos que no habían sido incluidos. Esta información estará disponible en 2020. España participará en la elaboración de este estudio en lo concerniente los productos agroalimentarios españoles que puedan verse afectados.



El acuerdo liberalizará ampliamente el comercio de bienes, de forma progresiva, con períodos de transición de 10 años en la mayoría de los productos. Además, se simplificarán los procedimientos aduaneros, se armonizarán las normas de calidad y de etiquetado y se reforzará la cooperación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias. Los productos importados tienen que cumplir las mismas normas de seguridad alimentaria que los de la Unión Europea.

Cabe destacar que Mercosur liberalizará gradualmente los aranceles del 95% las exportaciones agroalimentarias europeas, lo que supone

No obstante, este Gobierno es consciente de la sensibilidad de algunos sectores concretos, como pueden resultar los citados, por lo que ha solicitado a la Comisión Europea un seguimiento continuo de los mercados para, en caso necesario, adoptar las medidas correctoras pertinentes.

Madrid, 20 de febrero de 2020